

Costa Rica: la estabilidad del ojo de la tormenta

Daniel Camacho Sociólogo costarricense. Actual secretario general de FLACSO de Costa Rica.

La idea más difundida acerca del carácter de la organización política costarricense es la de una democracia ejemplar. Por eso, existe preocupación en los medios políticos de Latinoamérica y el mundo por la recurrencia de las noticias acerca de los efectos de la crisis económica mundial y los de las convulsiones políticas y militares de Centroamérica sobre la vida costarricense.

Un análisis más cercano desdibujaría esa imagen ficticia de una democracia perfecta e igualitaria que supuestamente no es sino hasta ahora, y de manera sorprendente, que comienza a sufrir amenazas. Demasiado frecuentemente se olvida que no hace más de treinta y cinco años los costarricenses fueron a una cruenta guerra civil (tres mil muertos en tres meses de guerra) que tuvo características inéditas hasta ese momento en América Latina.

Una de ellas es su carácter de guerra de clases. En efecto, cuatro años antes de la revolución boliviana de 1952, seis años antes del derrocamiento de Arbenz en Guatemala en 1954, once años antes de la revolución cubana y un cuarto de siglo antes del Chile de Allende, del FMLN de El Salvador y de la Nicaragua sandinista, la guerra civil de 1948 en Costa Rica enfrentó de manera nítida, las milicias obreras dirigidas por el Partido Comunista con el improvisado ejército de José Figueres, constituido por reclutas irregulares de la pequeña burguesía agraria y urbana y apoyado por la tradicional burguesía cafetalera. El triunfo militar y político del movimiento de Figueres fue abundante en consecuencias para la vida política del país, algunas de las cuales están vigentes.

Una opción reformadora

José Figueres, contrariamente a lo que esperaban algunos de sus aliados de la burguesía, no sólo se negó a derogar, sino que más bien impulsó la reforma social que implantaron sus adversarios, los comunistas, entre 1940 y 1948, aliados con el socialcristiano presidente Calderón Guardia y con el arzobispo de San José, monseñor Víctor Sanabria. Este se constituyó así, y esa es otra característica inédita de las luchas civiles de 1948 en Costa Rica, en el precursor de otros religiosos que

abrazaron, en etapas posteriores, las causas populares en alianzas con fuerzas revolucionarias.

El programa de Figueres, y de su Partido Liberación Nacional (PLN), que ha gobernado al país 18 de los 35 años posteriores a la guerra civil y ha dominado el Poder Legislativo 9 de los 17 años que no ha ocupado el ejecutivo, constituye una opción reformadora y correctiva de la desigualdad social, por medio de una fuerte participación del Estado. Muchas de sus medidas políticas constituyeron, como ya se dijo, una reformulación de las tomadas por sus adversarios de los dos gobiernos anteriores (socialcristianos, comunistas y católicos) contra los que luchó política y militarmente.

Así, el Instituto de Vivienda y Urbanismo, fundado por el PLN, encuentra su antecedente en la llamada Ley de Casas Baratas del régimen anterior, el Consejo Nacional de Producción, en el mecanismo estabilizador de precios; el Seguro Social, el Código de Trabajo y el Impuesto sobre la Renta no son debilitados, sino, por el contrario, fortalecidos.

Pero hay una diferencia cualitativa muy importante entre ambos proyectos políticos. Mientras que en el período 1940-48 las reformas respondían a las demandas y luchas de los movimientos populares, en el posterior obedecieron a un proyecto piramidal, donde las reformas fueron concedidas desde el poder en un afán preventivo de la movilización popular.

Rechazo a la organización sindical

La historia tiene sus trampas y una de ellas es que el PLN, movimiento político autodefinido como socialdemócrata, que en los últimos 35 años ha transformado al país en un sentido favorable a la redistribución de la riqueza, surgió de una guerra contra la clase obrera organizada. Esto marcó profundamente su acción política posterior, uno de cuyos rasgos era su resistencia y desconfianza frente a las organizaciones sindicales.

Por supuesto que aquellas de orientación marxista fueron abiertamente perseguidas. Unas veces de manera frontal (uno de los últimos episodios de la contienda de 1948 fue el fusilamiento de cuatro líderes comunistas en un recodo de la vía férrea que lleva el nombre dantesco de "El codo del diablo") y otras veces de manera sutil: ilegalización de sindicatos, obstáculos para el trabajo de los organizadores y otras medidas similares. Todo esto dentro del marco de una permanente campaña ideológica en la cual se señalaba como comunista lo que lo era y lo que simplemente se le parecía lejanamente. Por otro lado, el sindicalismo de otros tipos de orientación no fue de manera alguna estimulado por el PLN. En la época anterior a la guerra se desarrolló un vigoroso movimiento sindical de orientación cristiana, que obedecía, sobre todo, al interés de contrarrestar el fuerte movimiento sindical comunista. Pero ganada la guerra y eliminados éstos de la escena pú-

blica, sus partidos y organizaciones fueron ilegalizados, no había razón para que los grupos triunfantes (la burguesía cafetalera, la pequeña burguesía agraria y urbana y, sobre todo, la nueva fracción de la burguesía que se desarrolla al calor del PLN) se fijaran como meta el desarrollo sindical u otro tipo de organización popular independiente.

Sin adversario organizado del lado popular, las diversas fracciones de la burguesía pueden llegar fácilmente a un acuerdo acerca de la manera de compartir el poder. Sin el peligro de que las clases subordinadas encuentren su propia expresión política, los grupos dominantes pueden disputarse el poder entre ellos y construir un sistema electoral perfecto, en el cual el sufragio será limpiamente respetado.

Fracaso del modelo de desarrollo

El problema se presenta hoy, treinta y cinco años después, porque la capacidad económica del país que permitió aplicar una agresiva política redistributiva, se comienza a debilitar. Por un lado, a causa de los efectos de la crisis y, por otro, debido al agotamiento del modelo de desarrollo que fue aplicado.

En este punto hay que detenerse un poco porque para comprender los elementos de la actual coyuntura es necesario aclarar la evolución del modelo. Hemos dicho que las fuerzas triunfantes en la guerra civil de 1948 pronto sufrieron una escisión. Por un lado, la añeja burguesía cafetalera se agrupó alrededor de sí misma para evitar sin éxito que Figueres recogiera y continuara la política de reformas iniciadas en el período anterior. Por otro lado, la pequeña burguesía, compuesta por estudiantes, profesionales jóvenes, campesinos, empleados y artesanos, y la nueva burguesía diferenciada claramente de la tradicional y compuesta de medianos y pequeños industriales, comerciantes y finqueros, encontraron en las medidas políticas de Figueres y del PLN la oportunidad de su propia prosperidad económica. Uno de los instrumentos más efectivos para ello fue la banca nacionalizada.

Como se sabe, en 1949, y como producto de las contradicciones entre el proyecto político de Figueres y el de la burguesía agroexportadora tradicional, que también controlaba la banca, la Junta de Gobierno que administró de facto al país los 18 meses posteriores a la guerra civil, decretó la monopolización por parte del Estado de los depósitos bancarios y la expropiación, por la vía del pago del valor de las acciones a los expropiatarios, de las instituciones bancarias.

Este hecho tiene consecuencias profundas en la vida nacional, porque permitió a los mencionados grupos de pequeña burguesía y de burguesía naciente, devenir poco a poco en fracción potente de la burguesía para lo cual, a falta de acumulación propia, aprovecharon por medio del crédito, los recursos financieros de la banca nacionalizada. Y aquí asoma otra de las trampas de esta historia: esa generación de jóvenes idealistas, artesanos, agricultores, industriales y comerciantes

medios, que fueron a una guerra a nombre de la socialdemocracia, en contra de los comunistas, los socialcristianos y la Iglesia y que, triunfantes, rompen con la burguesía tradicional, se convierten en cabo de los años en otra fracción de la burguesía, esta vez modernizante en cuanto a los procesos de la producción, pero profundamente desconfiada de la organización y el movimiento popular.

Pero la trampa llega más allá. La influencia de las ideas de la CEPAL a partir de los años cincuenta implicó la entrada de Centroamérica y, específicamente, de Costa Rica en el modelo de desarrollo que suponía la escasez de capitales y tecnología y la abundancia de mano de obra en los países subdesarrollados. En consecuencia, la orden del día era la apertura de nuestras economías a la inversión extranjera, lo que en la práctica vale decir, la proveniente de los Estados Unidos. La nueva fracción de la burguesía constituida de la manera que se explicó, encontró el socio adecuado.

El llamado desarrollo industrial del país constituye, a grandes rasgos, en el fondo, una sucursalización en la que los empresarios costarricenses, como socios menores, administran las filiales locales de las grandes empresas transnacionales de capital estadounidense. Al empresario que se desarrolló al calor de la banca nacionalizada le convino más asociarse con su competidor transnacional antes de sucumbir ante tan poderoso enemigo. Y es así que esta nueva burguesía se convierte en un fuerte aliado de los intereses del imperialismo norteamericano en el país, rasgo que introduce en la formación política a la que pertenece mayoritariamente y de la cual ha derivado su propio progreso.

Todo lo anterior, unido a la existencia de un sector muy numeroso e influyente de pequeños propietarios campesinos da como resultado una estructura social que, en determinadas coyunturas, puede ser muy conservadora.

Recapitulando: la coyuntura actual costarricense presenta una hegemonía de las ideas más conservadoras y proimperialistas, producto del aplastamiento de las tendencias populares como efecto de la guerra civil de 1948; de la existencia de una nueva fracción de la burguesía aliada con el capitalismo transnacional y, específicamente, norteamericano, y de una estructura agraria donde pesa fuertemente el pequeño y el mediano propietario.

Estas no son las únicas fuerzas sociales presentes, pero sí las que explican el carácter de las opciones políticas del país en este momento.

Despertar popular

Los conflictos en el resto de Centroamérica tienen una incidencia directa en ese cuadro. Contribuyen a exacerbar el sentimiento conservador de los grupos hegemónicos. Pero contribuyen también a fortalecer a los sectores populares. Porque ante la política popular del sandinismo, las propuestas de los grupos insurgentes

en El Salvador y Guatemala no permanece indiferente en Costa Rica la clase obrera organizada, tanto el proletariado rural de las bananeras, como un sector, aunque incipiente, del proletariado industrial de las ciudades.

Tampoco permanecen indiferentes algunos sectores importantes de los funcionarios públicos, incluidos parte de los maestros y de los bancarios, los campesinos pobres y el peonaje.

Todos estos grupos están poco a poco re-encontrando sus propias formas de organización, bajo muy diversos aleros ideológicos, pero con una conciencia muy clara de sus contradicciones con los sectores que dominan económicamente al país. Y existen también opciones políticas que pueden eventualmente interpretarlas, tales como ciertas tendencias dentro del propio PLN, entre las que se encontraría, aunque no exclusivamente, la Juventud Liberacionista, algunos desprendimientos de lo que fue el Partido Unidad de Rodrigo Carazo (podrían encontrar ahí su razón política de ser el Partido Radical Demócrata del exministro de Carazo, Juan José Echeverría Brealey, o el Partido Reformista de Marina Volio, también exministra de Carazo, o las acciones hasta ahora no encuadradas orgánicamente de otro ministro del gobierno de Carazo, José Rafael Cordero Croceri) y las formaciones más radicales de izquierda, incluido el Partido Comunista.

La crisis económica que golpea fuertemente sobre todo a los sectores sociales mencionados dos párrafos atrás, podría ser también un elemento impulsor de su radicalización.

Ante esto, el gobierno norteamericano intenta hacer de Costa Rica una trinchera segura para sus intereses y ha optado por evitar un colapso, para lo cual ha brindado fuerte apoyo económico: el FMI se ha mostrado comprensivo, los centenares de bancos acreedores han prorrogado generosamente sus plazos, la ayuda económica directa por la vía de la AID y otras agencias similares no se ha hecho esperar.

¿Hasta dónde es posible con procedimientos que atacan sólo la manifestación de los problemas, evitar un proceso que tiene honda raíz estructural?

Esa es la incógnita que se despejará muy pronto. Por ahora, los campesinos pobres siguen ocupando tierras por la fuerza, los usuarios siguen bloqueando los caminos en protesta por el alza de las tarifas de la electricidad, el agua y otros servicios públicos, los sindicatos siguen luchando, a veces con éxito, por aumentos de sueldo que nunca llegan a atrapar el aumento de los precios, los bancarios, los obreros, los maestros hacen huelgas por las mismas razones, las exportaciones decrecen y el PIB en 1982 disminuyó en un 9%, los contrarrevolucionarios nicaragüenses continúan utilizando, con la oposición de las más altas autoridades costarricenses, el territorio nacional para simular que están peleando de verdad en Nicaragua, el gobierno apuesta fuerte a la ayuda norteamericana y a su capacidad, hasta ahora demostrada, para encontrar hábiles respuestas políticas a los conflic-

tos. Pero el modelo se sigue agotando, los efectos de la crisis van en profundidad y las luchas en Centroamérica cada vez se sienten más en la vida cotidiana de los costarricenses.

A lo largo del túnel, la única luz que se distingue es la de la alianza de los sectores populares con una nueva propuesta política y ese camino de muchos sacrificios y dificultades ya algunos lo han comenzado a transitar.